

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	888
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2019-00121-00
MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO SINGULAR
EJECUTANTE:	ENRIQUE ALBERTO CÁRDENAS GUALTEROS
EJECUTADA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO:	Revoca parcialmente auto traslado excepciones y concede recurso de apelación

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Surtido el traslado previsto en el artículo 319 del CGP, se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada contra el auto interlocutorio No. 445 emitido el 23 de mayo de 2022, por el cual se corrió traslado a la parte ejecutante de las excepciones de “*pago total de la obligación*”, “*pago-literalidad del título ejecutivo*” y “*prescripción*”, y se rechazaron de plano por improcedentes las excepciones de “*confusión-inexigibilidad del título por falta de legitimación en la causa por activa del demandante en contra de la ugpp*”, “*presunción de legalidad de los actos administrativos*” y “*principio de buena fe*”.

La apoderada de la parte recurrente solicitó que se revoque el proveído atacado o, en su defecto, se conceda el recurso de apelación, toda vez que las excepciones rechazadas se encuentran consagradas en el artículo 443, numeral 2, del CGP.

Explicó que la excepción de confusión se configura porque “*la sentencia hoy título base para la ejecución ordena que mi representada efectúe el descuento por concepto de aportes, lo que implica que de esta obligación la acreedora es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, y el deudor Enrique Alberto Cárdenas Gualteros, hoy ejecutante dentro de la presente Litis*”.

Adujo que la falta de legitimación en la causa, conforme al artículo 175 del CPACA, ha sido considerado jurisprudencialmente como una excepción mixta, por lo que es procedente que se estudie como excepción previa, pues fue formulada con el recurso de reposición que interpuso contra el mandamiento de pago.

Indicó que la excepción de pago es procedente en la medida en que, al no contemplarse la obligación de los descuentos por concepto de aportes a favor del ejecutante en la sentencia objeto de ejecución y al no tratarse de una obligación clara, expresa y exigible, no puede ser ejecutada en favor del demandante, sino que debe tenerse como extinta, ya que esa entidad acató lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 162 a 164).

En efecto, de conformidad con el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, y en cuanto a la oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el CGP.

El artículo 318, el inciso 3, del CGP preceptúa que cuando el auto se profiera fuera de audiencia, el recurso de reposición deberá interponerse por escrito con expresión de las razones que lo sustenten, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

Y, como el auto interlocutorio No. 445 del 23 de mayo de 2022, mediante el cual se corrió traslado de las excepciones, fue notificado por estado el 24 de mayo de 2022, y la parte ejecutada remitió por correo electrónico los recursos de reposición y apelación el 25 de mayo de 2022, es claro que fueron presentados en forma oportuna y reúnen los requisitos legales, por lo que corresponde emitir pronunciamiento de fondo.

Los artículos 442 y 443, del CGP prevén:

“ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.

3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios”.

“ARTÍCULO 443. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. El trámite de excepciones se sujetará a las siguientes reglas:

1. De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado se correrá traslado al ejecutante por diez (10) días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer valer.

2. Surtido el traslado de las excepciones el juez citará a la audiencia prevista en el artículo 392, cuando se trate de procesos ejecutivos de mínima cuantía, o para audiencia inicial y, de ser necesario, para la de instrucción y juzgamiento, como lo disponen los artículos 372 y 373, cuando se trate de procesos ejecutivos de menor y mayor cuantía.

Quando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte, decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373. En este evento, en esa única audiencia se proferirá la sentencia, de conformidad con las reglas previstas en el numeral 5 del referido artículo 373.

3. La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso.

4. Si las excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, en la sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda.

5. La sentencia que resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el caso del numeral 3 del artículo 304.

6. Si prospera la excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará la responsabilidad del ejecutado al valor de los bienes que le hubieren sido adjudicados en el proceso de sucesión” (Subrayado fuera de texto).

El artículo 1724 del Código Civil define la confusión, como forma de extinción de la obligación, en los siguientes términos:

“Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago”.

En el presente caso se constata que la parte ejecutada, en la contestación de la demanda, formuló la excepción de confusión de la siguiente manera (fls. 128 a 135):

“3 CONFUSIÓN – INEXIGIBILIDAD DEL TÍTULO POR FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA DEL DEMANDANTE EN CONTRA DE UGPP

La excepción se encuentra debidamente probada ya que es claro que el titular de la obligación derivada del descuento por concepto de descuentos de ley es UGPP (sic), y para el caso, el demandante ostenta la calidad de deudor, quien debió en términos del artículo 172 del CCA, en tratándose de condenas en abstracto, presentar incidente para determinación de la condena, al respecto la norma determina:

(...) ‘Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior, según fuere al caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación’ (...).

Sin embargo, al momento de proferir sentencia, el demandante pudo solicitar la aclaración de la misma, pero no lo hizo, y luego dentro de los 60 días de que trata la norma no formuló el incidente con el fin de establecer la cuantía de la pretensión, por lo que la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada, y por tal razón no es susceptible de debate por vía ejecutiva.

Nótese que el título ejecutivo faculta e impone una carga legal a mi poderdante al descuento de ley sobre los factores salariales de forma irrestricta, lo que implica la falta de requisitos formales de la demanda, en la medida que lo que pretende el demandante, es por vía ejecutiva realizar el recobro de los descuentos autorizados en el título y aceptados por el deudor, y además ordenados por la ley, y liquidados con base en la misma, conforme se estableció en la Resolución RDP 018390 del 23 de mayo de 2018.

En este caso se aplicó la ley 100 de 1993, artículo 17, en concordancia con el decreto 1158 de 1994, donde establece la obligatoriedad de las cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, eso implica todos los periodos laborados, para los cuales se haga necesario dentro de la reliquidación incorporar factores salariales.

Finalmente, al demandante se le resolvió la prestación mediante resolución RDP 018390 del 23 de mayo de 2018, en la que se ordenó el descuento, y posteriormente, conforme la sentencia título base de la presente acción se le determinó al demandante la fórmula legal utilizada para la determinación de la obligación con base en los conceptos establecidos por el Ministerio de Hacienda y los casos en los que se aplica así:

(...) a. Cuando el Ingreso Base de Liquidación pensional utilizado judicial o conciliatoriamente, incluya factores no contemplados dentro del Ingreso Base de Cotización, o sobre los cuales no se hicieron los respectivos descuentos de ley.

b. Cuando en el reconocimiento o en la reliquidación pensional por vía judicial o conciliatoria, se aplica un ingreso Base de Liquidación diferente a los contemplados en el inciso 3 del artículo 36 y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

En los eventos señalados en los numerales a) y b), habrá lugar a que el Sistema General de Pensiones recupere el valor de lo no cotizado y que haya dado origen a la desfinanciación (sic), mediante la aplicación de los siguientes mecanismos (...).

Por lo anterior, la entidad realizó el descuento de los aportes en su totalidad, con fundamentos legales y jurisprudenciales, aplicando la fórmula establecida por el Ministerio de Hacienda, lo que hace que el debate respecto de los aportes pensionales sobre los que no se realizaron cotizaciones o se hicieron por valores inferiores no puede debatirse en el proceso ejecutivo, sino que dicha obligación deberá ser debatida en un proceso ordinario, agotada la vía gubernativa, donde se convoque a las partes para la defensa de sus intereses, y se reitera la inviabilidad del presente proceso ejecutivo, pues el demandante respecto de los aportes

pensionales no ostenta la calidad de acreedor y por ende no está legitimado en la causa por pasiva.

Corolario lo antes citado, no será procedente que la parte accionante, pretenda a través de esta vía que se ordene a la UGPP inaplicar la resolución que ordenó el cobro de los aportes no efectuados, por no estar de acuerdo con los mismos, pues como se indicó, están soportados en una sentencia del Consejo de Estado y el principio de la sostenibilidad, que busca que no se cause un grave perjuicio a la sostenibilidad del sistema financiero y al Sistema General de Seguridad Social (...).

De otra parte, es necesario indicar que el numeral primero del mandamiento de pago no obedece a la pretensión derivada de un título, pues lo que se intenta es debatir la legalidad o ilegalidad del descuento por aportes, es decir, cuestionar la obligación cumplida y ejecutada por mi poderdante, cuando este tipo de pretensión obedece a la acción declarativa que solo puede predicarse en el proceso ordinario laboral o contencioso administrativo. Adicionalmente, se cobran intereses moratorios, aun cuando en la literalidad del título ejecutivo no se establecieron respecto de los aportes pensionales y esta pretensión solo le asistiría a mi poderdante por legitimación en causa”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que si bien la excepción formulada por la entidad ejecutada carece de técnica, pues integra dos medios exceptivos en uno solo (confusión y falta de legitimación en la causa), lo cierto es que la de confusión se encuentra enlistada en el artículo 442, numeral 2, del CGP y, por ende, debe tramitarse dando traslado a la parte ejecutante por el término de diez (10) días para que se pronuncie y de ser el caso adjunte o solicite pruebas, de manera que fue un desacierto del juzgado haberla rechazado de plano y, por tanto, le asiste razón a la apoderada de la entidad ejecutada y se repondrá en ese sentido el proveído dictado el 23 de mayo de 2022.

No ocurre lo mismo con la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, pues, de un lado, no figura entre las excepciones de mérito consagradas en el artículo 442-2 del CGP y, de otro, tal reparo fue resuelto de fondo en el auto No. 1142 del 15 de octubre de 2021 (fls. 151 a 153, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:

“Por consiguiente, podría concluirse que el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada devendría improcedente, habida cuenta que las controversias suscitadas por ese medio impugnativo involucran reparos a los requisitos sustanciales y no a las exigencias formales del título ejecutivo, en la medida en que adujo que la obligación cobrada no es expresa ni exigible porque no está contenida en la sentencia que sirve de título, con lo cual se desatendió la literalidad como uno de sus rasgos esenciales; que el ejecutante no es el acreedor sino el deudor de la obligación perseguida, dado que la titular de la acreencia es la UGPP, y por ende no está legitimado para cobrarla; y que la inconformidad del actor con la aplicación de la fórmula empleada por la parte ejecutada para liquidar los aportes a pensión debe alegarse en el proceso declarativo y no en el de ejecución; de suerte que, en principio, a la entidad demandada le incumbía alegarlos a través de las excepciones de mérito, como en efecto lo hizo con la contestación de la demanda (fls. 128 a 135), y al juez dirimir las en la sentencia.

No obstante, dada la restricción expresa que en materia de excepciones de mérito impone la ley para invocarlas frente a una sentencia de condena que sirve de título ejecutivo y con el fin de no sacrificar el derecho de contradicción y defensa de la parte ejecutada, dada la dificultad que en ciertos casos, como éste, representa distinguir los requisitos sustanciales y formales, pues unos y otros, por sus diferencias tenues, a veces se confunden o trastocan, el juzgado estudiará y resolverá en esta oportunidad el segundo y tercero de tales reparos, esto es, que el título ejecutivo no proviene del deudor, toda vez que la parte ejecutada no ostenta esa condición, sino la de acreedora, por ser la titular y legitimada para cobrar los aportes a pensión que por ley corresponde cotizar al trabajador y, de otro lado, que el juicio ejecutivo no es el ámbito procesal adecuado para objetar la fórmula en la cual se apoyó la UGPP para liquidar los aportes a pensión cuyo descuento en exceso ataca el actor, pues en cuanto al primer reparo, relativo a la falta de exigibilidad del título ejecutivo por desatender su literalidad, se dirimirá en la sentencia que decida las excepciones de mérito o, mejor, se volverá eventualmente sobre este aspecto en ese acto de decisión.

En efecto, las sentencias objeto de ejecución ordenaron la reliquidación de la pensión de vejez del demandante con la inclusión de los factores salariales adicionales devengados en el último año de servicios, esto es, sueldo básico, bonificación por servicios, prima de

servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, y dispusieron que sobre las nuevas partidas se efectuarían los descuentos que por aportes a pensión le correspondía cotizar al trabajador en el porcentaje indicado en la ley y atendiendo el fenómeno extintivo de la prescripción trienal, lo que en efecto hizo la UGPP en el acto administrativo de cumplimiento de las aludidas providencias, sólo que en un monto superior al previsto en la normatividad vigente en el período en el cual percibió tales emolumentos (1999 a 2002), lo cual significa que la orden de pago librada a favor del actor en el mandamiento ejecutivo no corresponde propiamente al cobro del valor de tales cotizaciones, como lo aduce erróneamente la UGPP, y de cuya obligación no se discute la titularidad de ésta, sino a las diferencias pensionales ordenadas en las referidas sentencias que le dejó de cancelar al actor por haberle deducido una suma superior a la que estaba obligado a cotizar por aportes a pensión.

Ejemplificando lo pretendido en la demanda ejecutiva, se podría decir que el descuento en exceso de los aportes a pensión le causó al actor una merma en el pago de las diferencias pensionales a las que fue condenada la UGPP, por lo que el cobro compulsivo formulado por el actor se contrae al pago del valor de tal faltante del reajuste pensional reconocido judicialmente y no a la cancelación del monto de la cotización deducida, como lo pretende tergiversar la parte impugnante, de suerte que el ejecutante es el titular de la obligación pensional contenida en las sentencias de condena invocadas como título ejecutivo y, por tanto, ostenta la condición de acreedor de las diferencias pensionales cobradas y la UGPP la calidad de deudora.

También se desestimaré el reparo consistente en que el juicio ejecutivo no es el escenario apropiado para controvertir la fórmula utilizada por la UGPP para liquidar los aportes al sistema de pensiones a cargo del trabajador, porque el cálculo de tales cotizaciones debe sujetarse a las pautas dadas en las sentencias objeto de ejecución, es decir, que las sumas dejadas de descontar por tal concepto se actualizarían desde cuando se hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria, aplicando la fórmula de indexación explicada en la parte resolutive de la providencia de primera instancia, modificada en segunda instancia únicamente en cuanto a la fecha a partir de la cual se surtirían los efectos fiscales de la reliquidación pensional, de modo que es un desatino alegar que el actor debe adelantar un nuevo proceso ordinario para determinar cuál de las dos fórmulas debe aplicarse para estimar los consabidos aportes, pues en ese aspecto las sentencias son expresas y claras.

En este orden, no habría lugar a reponer la decisión impugnada, adiada el 12 de agosto de 2020 y, por consiguiente, en principio, se proseguirá con el trámite procesal subsiguiente”.

La anterior providencia quedó debidamente ejecutoriada y, por lo tanto, no es viable reabrir una controversia sobre aspectos que fueron objeto de pronunciamiento de fondo.

Finalmente, en cuanto a la excepción de “*pago-literalidad del título ejecutivo*” se observa que en el auto impugnado se corrió traslado de la misma a la parte ejecutante, conforme lo establece el artículo 443, numeral 1, del CGP, de suerte que es infundado el aserto de la apoderada de la parte demandada y, por tanto, no se repondrá el proveído en ese aspecto.

De otra parte, en cuanto al recurso de apelación, el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 243 del CPACA y lo adicionó con el parágrafo 2, el cual dispuso que en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan, de suerte que para la concesión del recurso de alzada en este juicio compulsivo debe acudir a los artículos 320 y siguientes del CGP.

En efecto, el artículo 321, numeral 4, del CGP prevé que es apelable el auto proferido en primera instancia que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo; el artículo 322 prescribe que la apelación contra un auto que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse y sustentarse ante el juez que lo dictó, por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado, so pena de ser declarado desierto; el artículo 323 dispone que la apelación de un auto se otorgará en el efecto devolutivo, a menos que exista disposición en contrario, evento en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso; y el artículo 324 preceptúa que cuando se trate de apelación de un auto en el efecto devolutivo, se remitirá al superior una reproducción de las piezas que el juez señale, a costa del recurrente, quien deberá suministrar las expensas necesarias en el término de cinco (5) días, so pena de ser declarado desierto.

En el presente caso, el auto dictado el 23 de mayo de 2022 que es motivo de inconformidad de la parte ejecutada (fl. 160), rechazó de plano una excepción de mérito, de modo que la concesión del recurso de apelación es viable, pues la parte recurrente está legitimada en la causa, ostenta interés jurídico para impugnarla en tanto resulta adversa a sus intereses, lo interpuso y sustentó oportuna y debidamente y la providencia es susceptible del recurso de alzada, por lo que se concederá en el efecto devolutivo ante el superior funcional.

Por último, dado que el expediente está escaneado, no se ordenará la expedición de copias físicas de las piezas procesales necesarias y, en su lugar, se enviará a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el proceso digitalizado para que desate el recurso.

Por consiguiente, se dispone:

1. REPONER parcialmente el auto interlocutorio No. 445 del 23 de mayo de 2022, en la parte que rechazó de plano la excepción de *“confusión”* y, en consecuencia, se ordena correr traslado de ese medio exceptivo de mérito a la parte ejecutante por el término de diez (10) días, contado a partir del día siguiente a la notificación por estado de esta providencia, de conformidad con el artículo 443, numeral 1, del CGP.

2. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada contra el auto interlocutorio No. 445 del 23 de mayo de 2022, en la parte que rechazó de plano la excepción de *“inexigibilidad del título por falta de legitimación en la causa por activa del demandante en contra de la ugpp”* y por haber dado traslado en dicho proveído de la excepción de *“pago-literalidad del título ejecutivo”*.

3. CONCEDER, en el efecto devolutivo, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto proferido el 23 de mayo de 2022, que rechazó de plano por improcedente la excepción de *“inexigibilidad del título por falta de legitimación en la causa por activa del demandante en contra de la ugpp”*.

4. ENVIAR copia digitalizada del expediente a dicha Corporación para que se surta el recurso de alzada, dejando las constancias de rigor.

La presente providencia será notificada en estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 180-1 y 201 del CPACA, el cual podrá ser consultado en el portal de internet de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

AHSC

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **11f8661b7d27e616241613d9ada5d578ebb758e15faba372f6690a4e614b9965**

Documento generado en 19/09/2022 08:23:07 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>